



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO TREINTA Y OCHO (38) CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ D.C.
cmpl38bt@cendoj.ramajudicial.gov.co
Cra. 10 No. 14-33 Piso 11
Tel. 601-3532666 – Ext. 70338

Bogotá D.C., 17 de junio de dos mil veinticuatro (2024)

PROCESO	VERBAL 372 y 373 CGP
DEMANDANTE	IVAN ARIZA HERNÁNDEZ
DEMANDADOS	ALFONSO ROZO DÍAZ, JOHAN RICARDO MORENO LUGO Y COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS
RADICADO	2022-00184
DECISIÓN	NIEGA PARCIALMENTE PRETENSIONES

PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL con ocasión de un accidente de tránsito, demanda promovida por IVÁN ARIZA HERNÁNDEZ contra ALFONSO ROZO DÍAZ, JOHAN RICARDO MORENO LUGO Y COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS.

-SENTENCIA: Evacuadas las etapas del artículo 372 y 373 se impone al Despacho proferir la decisión de instancia dentro del proceso de la referencia.

I. ANCEDENTES

El señor IVAN ARIZA (propietario de la motocicleta con placa YPH22E) inició demanda de responsabilidad civil extracontractual en contra de los señores Alfonso Rozo Díaz, (conductor del vehículo de placas JWR 063), y del señor Johan Ricardo Moreno (propietario del citado rodante), con ocasión de accidente de tránsito acaecido 6 de marzo de 2021 en la carrera 14 con calle 73 17 sur de Bogotá, en el cual se vieron involucrados estos rodantes.

Refiere el demandante que debido al este hecho sufrió traumas en su cuerpo, lo cual le generó una incapacidad médico legal de 15 días y 158 definitivos, y secuelas de carácter permanente en su muñeca, por lo que ha tenido que incurrir en gastos para su recuperación y los necesarios para reparación de la motocicleta. (Croquis folio 9 y 10 archivo 2 del expediente digital).

Los demandados se opusieron a las pretensiones, con sustento en que el informe de tránsito no da certeza de la culpabilidad del chofer convocado, al ser lo allí consignado una mera hipótesis descriptiva de los hechos.

Añadieron que medicina legal le determinó al actor una incapacidad definitiva de 15 días y secuelas medico legales de carácter transitorio, que la de carácter permanente ya la tenía, conforme registra la historia clínica, y que no se aportaron documentos idóneos que pruebe el valor de los arreglos de la moto reclamados.

Plantearon las siguientes excepciones:

Alfonso Rozo Díaz conductor del vehículo taxi:

- ✓ Insuficiencia de elementos probatorios que acrediten la responsabilidad.
- ✓ Indebida estimación de daños morales.
- ✓ Enriquecimiento sin justa causa (por el cobro de lo no debido)
- ✓ Objeción al juramento estimatorio

Johan Ricardo Moreno Lugo, propietario vehículo taxi:

- ✓ Ruptura del nexo causal por fuerza extraña – culpa exclusiva de la víctima
- ✓ Ausencia de demostración del daño en la cuantía pretendida
- ✓ Reducción del monto de la indemnización por concurrencia de culpas
- ✓ Traslado del riesgo a la compañía aseguradora MUNDIAL DE SEGUROS

- ✓ Excepción "genérica" o innominada contemplada en los artículos 281 y 282 del Código General del Proceso.
- ✓ Objeción a la tasación de indemnización de perjuicios

Mundial de seguros:

- ✓ Inexistencia de prueba de los perjuicios materiales (Fol 4 ED 8 C2)
- ✓ Inexistencia de prueba del daño moral y daño a la vida en relación, excesiva tasación de perjuicios y falta de demostración de estos, por la demandante. (Fol 5 ED 8 C2).
- ✓ Inexistencia de la obligación de indemnizar, toda vez que, el contrato instrumentado en la póliza de responsabilidad civil contractual, no está llamado a producir sus efectos, por ausencia del presupuesto fundamental del mismo, a saber, la prueba de la responsabilidad del accidente de tránsito por parte del señor Alfonso Rozo Díaz, conductor del vehículo de placas jwr-063. (Fol. 6-7 ED 8 C2).
- ✓ Eximente de responsabilidad culpa exclusiva de la víctima (Fol.7 ED 8 C2).
- ✓ Concurrencia de culpas y consiguiente reducción de la indemnización. (fol 8 ED 8 C2).
- ✓ Límite de cobertura (fol. 9 ED 8 C2).
- ✓ Genérica e innominada (Fol 10 ED 8 C2).

II. CONSIDERACIONES

1. Los denominados presupuestos necesarios para la normal configuración y trámite de la *litis*, los cuales son: capacidad de las partes, demanda en forma y competencia del Juzgado, se hallan verificados en el expediente y no se observa causal de nulidad alguna con entidad suficiente para invalidar lo hasta aquí actuado (artículo 29 de la Constitución, artículos 26, 82, 89 y siguientes del Código General del Proceso).

2. En el caso en análisis, corresponde determinar si son civil y extracontractual los convocados por los daños causados al demandante, en virtud del hecho dañoso que dio lugar a este proceso. En caso

afirmativo, resolver sobre los perjuicios reclamados y establecer a quién le concierne asumir su pago.

3. El artículo 2341 del Código Civil señala que el que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido.

Son elementos de la responsabilidad aquiliana: el hecho, el daño y el nexo causal. Así pues, es indispensable que exista relación entre el primero y el segundo elemento para predicar una responsabilidad.

Además, debe decirse *“La actividad de conducir vehículos automotores, ha sido considerada por la jurisprudencia constitucional como por la especializada en la materia, una actividad peligrosa “que coloca per se a la comunidad ante inminente peligro de recibir lesión”. Cuando con este tipo de actividades se causa un daño es posible reclamar la indemnización o reparación del mismo a través del proceso ordinario de responsabilidad civil extracontractual.”* (Sentencia T-609/14).

También, a efectos resolver este asunto, ya que se alega que los implicados tuvieron injerencia en el acontecimiento fatídico, resulta importante recordar que si bien, en un principio la doctrina de la Corte Suprema de Justicia resolvió el problema de las concausas o de la concurrencia de actividades peligrosas, adoptando diversas teorías como la «neutralización de resunciones»¹, «presunciones recíprocas»², y «relatividad de la

¹ Tenía aplicación en los eventos de responsabilidad donde se habla de presunción de culpa, es decir, cuando se ejerce una actividad riesgosa. Dicha teoría afirmaba que las presunciones se aniquilaban, para dar paso a la culpa probada (CSJ SC 5 de mayo de 1999, rad. 4978). Durante su implementación, un sector de la doctrina se oponía a la misma, por «(...) *carecer de fundamento normativo, toda vez que el hecho de haberse causado el daño por la intervención encontrada de dos cosas riesgosas no puede provocar una mutación normativa, es decir, pasar del riesgo como factor de imputación, a la culpa probada (...)*» (PIZARRO, Ramón Daniel, *“Responsabilidad por riesgo creado y de empresa. Contractual y extracontractual”*, t. II. Buenos Aires. La Ley, 2006, pp. 274-277).

² En este evento, las presunciones de culpa por quienes desarrollan labores riesgosas no se neutralizan sino que permanecen incólumes. Significaba que cuando una de las partes era la que sufría el daño, la presunción subsistía en contra de quien no lo padeció, quien podrá destruir la presunción probando la incidencia del hecho de la víctima en la producción del evento dañoso (CSJ SC 26 de noviembre de 1999, rad. 5220). Su crítica radicaba en que «(...) *la solución de apoyaba en una falsa idea de la responsabilidad civil, cuya esencia se fundamenta en la idea de indemnización y no de pena, por tal motivo no se podía determinar la responsabilidad según la culpa del ofensor o la víctima (...)*» (PEIRANO FACIO, Ramón Daniel. *“Responsabilidad extracontractual”*, 3ª ed. Bogotá. Temis, 1981, pág. 442).

peligrosidad»³, pero fue a partir de la sentencia de 24 de agosto de 2009, rad. 2001-01054-014, en donde retomó la tesis de la intervención causal⁵.

Al respecto, indicó:

“...La (...) graduación de ‘culpas’ en presencia de actividades peligrosas concurrentes, [impone al] (...) juez [el deber] de (...) examinar a plenitud la conducta del autor y de la víctima para precisar su incidencia en el daño y determinar la responsabilidad de uno u otra, y así debe entenderse y aplicarse, desde luego, **en la discreta, razonable y coherente autonomía axiológica de los elementos de convicción alegados regular y oportunamente al proceso con respeto de las garantías procesales y legales.**

“Más exactamente, **el fallador apreciará el marco de circunstancias en que se produce el daño, sus condiciones de modo, tiempo y lugar, la naturaleza, equivalencia o asimetría de las actividades peligrosas concurrentes, sus características, complejidad, grado o magnitud del riesgo o peligro, los riesgos específicos, las situaciones concretas de especial riesgo y peligrosidad, y en particular, la incidencia causal de la conducta de los sujetos, precisando cuál es la determinante (imputatio facti) del quebranto, por cuanto desde el punto de vista normativo (imputatio iuris) el fundamento jurídico de esta responsabilidad es objetivo y se remite al riesgo o peligro (...)**” (se resalta).

Por lo tanto, la problemática de la concurrencia de actividades peligrosas se debe ponderar de manera objetiva cada conducta, es decir, la de la víctima como del agente, con el fin de determinar la causa en la generación del daño, para de esta manera entrar a ponderar el *quantum* indemnizatorio.

Por lo anterior, se resalta que existen eventos en que “...*el daño ..., tiene su*

³ Se tiene en cuenta el mayor o menor grado de peligrosidad de la actividad o mayor o menor grado de potencialidad dañina (CSJ SC 2 de mayo de 2007, rad. 1997-03001-01). Su censura consistía en que dicha tesis se preocupaba más por establecer que labor era más riesgosa en relación con otra, dejando de lado considerar cuál de ellas había causado el daño.

⁴ Reiterado en sentencias de 26 de agosto de 2010, rad. 2005-00611-01, y 16 de diciembre de 2010, rad. 1989-000042-01.

⁵ Teoría que en todo caso había sido acogida originariamente por esta Corte en sentencia de 30 de abril de 1976, G.J. CLII, nº. 2393, pág. 108.

manantial en concurrencia de culpas de uno y de otro, en negligencia tanto de la víctima como del autor del perjuicio, entonces, en este último evento, en virtud de la concausa, el demandado no puede ser obligado, sin quebranto de la equidad, a resarcir íntegramente el daño sufrido por la víctima. Si la acción o la omisión culposa de ésta, fue motivo concurrente del perjuicio que sufre, necesariamente resulta ser el mismo lesionado, al menos parcialmente, su propio victimario. Y si él ha contribuido a la producción del perjuicio cuya indemnización demanda, es indiscutible que en la parte del daño que se produjo por su propio obrar o por su particular omisión, no debe responder quien, sólo contribuyó a su producción, quien, realmente, no es su autor único, sino solamente su copartícipe..."⁶.

Debido a la coexistencia de elementos concluyentes del daño, donde unos son atribuibles a la persona que aparentemente causó el daño y otros a la propia víctima, se ubica en el marco de la causalidad y da lugar a la aplicación de la "compensación de culpas", figura estatuida en el artículo 2357 del Código Civil.

Así las cosas, "...cuando tanto la actuación del accionado como la de la víctima, son causa del daño, hay lugar a la reducción de la indemnización imponible al primero, en la misma proporción en la que el segundo colaboró en su propia afectación..."⁷, ello a la luz de la norma reseñada.

Así las cosas, no es suficiente que al demandado se le atribuya la culpa, sino que su conducta hubiere contribuido de forma importante en la producción del daño reclamado, independientemente de si su proceder es merecedor o no de un reproche subjetivo. Por lo cual, se deberá evaluar la intervención de la víctima demandante en la materialización del daño, pues ello incide con la disminución de su resarcimiento.

Por lo cual, en la generación del daño pueden existir causas concurrentes, pero solo se toma la o las que han desempeñado el papel preponderante y trascendente en la realización del perjuicio. De ahí que, la Corte Suprema de Justicia abandonó la teoría de la equivalencia de condiciones, según la

⁶ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 26 de octubre de 2000, expediente 5462. Magistrado Ponente Doctor José Fernando Ramírez Gómez.

⁷ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia SC5125 de 15 de diciembre 2020, expediente 13836-31-89-001-2011-00020-01.

cual, *“...todos los antecedentes o condiciones (y aún las ocasionales), tiene ontológicamente el mismo peso para la producción del resultado...”*⁸.

Vale decir, que al respecto el cuerpo Colegiado señaló: *“...aun cuando con variaciones, por regla general se ha inclinado por la causalidad adecuada...”*. Precizando que *“...busca establecer cuál o cuáles hechos tuvieron la aptitud de producir el daño, considerando el curso normal de las cosas o lo que es usual, pues sobre ellos recaerá el peso del débito indemnizatorio...”*⁹.

Este postulado, *“...se analiza ex post al hecho, al momento de determinar la atribución del daño (...). Tal criterio supone la demostración de un aspecto material (causalidad material, generalmente para las conductas de acción) y de otro, el jurídico (causalidad o imputación jurídica, para todas las conductas, incluyendo inevitablemente las omisiones), en pos de remover toda duda sobre la incidencia del comportamiento en la producción del menoscabo; y del mismo modo, para deslindar las diferencias, semejanzas, relaciones y conexiones entre los elementos uno y dos: 1. Acción, conducta por acción u omisión, comportamiento o hecho dañoso; el fenómeno que da lugar a otro. 2. El resultado, el daño, la transformación del mundo exterior.”*

*“El aspecto material, ya en forma concreta o abstracta, se centra en la ligazón existente entre la acción u omisión y el daño, en orden a determinar cuál fue la contribución positiva en su ocurrencia o cómo la conducta omitida hubiera evitado la afectación o morigerado su efecto. El aspecto jurídico se refiere a la evaluación que debe hacerse sobre la aptitud o incidencia que tuvo el hecho para materializar el perjuicio, en términos de las disposiciones legales en juego o de los títulos de imputación normativa afectados...”*¹⁰.

Al respecto, el Alto Tribunal especificó en reciente providencia que:

“...con ocasión de una eventual concausalidad en la ocurrencia del daño podría llegar a disminuirse la indemnización, o incluso exonerar a la entidad de toda responsabilidad; escrutinio que habrá de realizarse no a partir de la

⁸ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 26 de septiembre de 2002, expediente 6878.

⁹ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Aclaración de voto de sentencia de 12 de enero de 2018, de autoría del doctor Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo.

¹⁰ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia SC016 de 24 de enero de 2018, expediente 000675.

*mera confrontación de conductas sino evaluando la causa jurídica del daño para definir en qué medida una u otra fue la determinante en la ocurrencia del hecho dañoso...*¹¹.

En ese contexto, se procederá a determinar la incidencia del comportamiento de cada uno de los involucrados en la producción del resultado, para establecer a cuál le resulta imputable el daño, desde el punto de vista fáctico y, luego, jurídico.

Con este fin, la Honorable Corte Suprema de Justicia, reseñó que valorar la *“...conducta de las partes en su materialidad objetiva y, en caso de encontrar probada también una culpa o dolo del afectado, estable[cer] su relevancia no en razón al factor culposo o doloso, sino al comportamiento objetivamente considerado en todo cuanto respecta a su incidencia causal...”*¹².

Para este propósito, se determinará la contribución causal de los intervinientes en la producción del daño, por lo que se impone examinar las pruebas aportadas, para establecer la incidencia de cada una de las conductas y su incidencia en el hecho causante del perjuicio.

Para tal efecto, se tiene que el informe policial de accidente de tránsito número A 001241840 refiere que tuvo lugar en carrera 14 con calle 73 17 sur de Bogotá; sobre las condiciones de la vía se determinó que es una recta, plana, con berma, doble sentido, carriles en asfalto, en buen estado, seca y con visibilidad normal. También dieron cuenta de ello, las partes en el interrogatorio de parte, así como el agente de policía que atendió el caso en su testimonio.

En el croquis se simboliza una carretera de doble sentido, con una velocidad máxima permitida de 50 k/h. El taxi y la motocicleta transitaban por la misma vía pero por diferentes carriles, este rodante transitaba por el carril derecho y aquel por el carril izquierdo, cuando invadió el contrario para recoger unos pasajeros ante la parada que le hicieron (según se evidenció de los interrogatorios de parte). Por ello, en la casilla de hipótesis del accidente se

¹¹ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia 1697 del 14 de mayo de 2019, expediente 2009-00447-01.

¹² Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia SC2107 de 12 de junio de 2018.

consignó la 103, esto es: “*103 Adelantar cerrando cuando se obstruye el paso al vehículo que va a pasar o al que paso*”.

De lo suscrito en el documento, entonces, se infiere que el proceder del conductor del taxi fue la causa adecuada del accidente, pues cuando transitaba por la senda izquierda de manera repentina, invadió el carril derecho, por donde circulaba la moto, arrollándola, pese a que tenía la prelación en la ruta por seguir un trayecto sin desviación. Ello es dable colegirlo de la posición de los dos vehículos, así como las marcas de impacto en el carro en la parte trasera e intermedia derecha y de la motocicleta en la zona delantera.

Estos hechos fueron corroborados en los interrogatorios, pues las dos partes indicaron que el promedio de velocidad de los rodantes era de 30 a 40 k/h pues el conductor del taxi señaló que él invadió el carril derecho para recoger unos pasajeros, indicando que la moto lo impactó en la parte trasera, lo cual no es cierto, de acuerdo a lo señalado por el agente de tránsito y el conductor de la motocicleta quienes refirieron que el impacto fue por el costado derecho del vehículo de servicio público.

Se impone la valoración del informe policial del accidente, con los demás elementos de juicio incorporados al plenario ya relatados, más aún cuando aquel es un “... *documento público, y como tal, goza de presunción de autenticidad, que la parte interesada no desvirtuó, amén de la presunción de veracidad que la primera aparece...*”¹³.

En ese orden de ideas, en el escenario descrito el proceder del chofer del taxi no solo constituye el único hecho que tuvo la aptitud de producir el daño, sino que es una clara muestra de la desatención al deber objetivo de cuidado, impuesto por los artículos 60 parágrafo 2°, 61 y 73 del Código Nacional de Tránsito que proscriben tales procedimientos, con el fin de dilucidar la imputación jurídica del daño en tanto disponen: el primero que “...[
PARÁGRAFO 2o. Todo conductor, antes de efectuar un adelantamiento o cruce de una calzada a otra o de un carril a otro, debe anunciar su intención por medio de las luces direccionales y señales ópticas o

¹³ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 26 de octubre de 2000, expediente 5462. Magistrado Ponente Doctor José Fernando Ramírez Gómez.

audibles y efectuar la maniobra de forma que no entorpezca el tránsito, ni ponga en peligro a los demás vehículos o peatones...”, y el posterior que “...VEHÍCULO EN MOVIMIENTO. Todo conductor de un vehículo **deberá abstenerse de realizar o adelantar acciones que afecten la seguridad en la conducción del vehículo automotor, mientras éste se encuentre en movimiento.**” Y por último, “En general, cuando la maniobra ofrezca peligro.”

Aunado a lo anterior, no quedó plenamente demostrada la velocidad en que desplazaba la motocicleta que permita inferir que superó el mínimo permitido, y con ello llegar a determinar que se presentó la culpa compartida por parte de este; a contrario sensu, está acreditado que el taxi, irrumpió de forma intempestiva, por donde transitaba la moto (carril derecho) pues este tenía la prelación de la ruta, entonces, se insiste, el proceder de quien manejaba el vehículo de servicio público fue el único hecho determinante del riesgo percutor en la consumación del daño, pues es claro que hubo una falta al deber objetivo de cuidado, pues dejó de observar las medidas de precaución al invadir el carril sobre el cual no tenía la prelación.

En virtud de lo anterior, valga destacar que el Máximo Órgano de la Jurisdicción Ordinaria en reciente pronunciamiento indicó:

“...al estar relacionado el artículo 2357 del Código Civil con un asunto de causalidad, para que su aplicación pueda darse es preciso que el daño también sea objetiva o materialmente imputable a la conducta de la víctima, de modo que, a contrario sensu, no lo será sí, por ejemplo, su conducta no ha incrementado el riesgo de que se produzca el evento dañoso, o ha supuesto únicamente la desatención de una norma, directriz o deber de cuidado, o no ha sido causa eficiente o adecuada del suceso desafortunado...”¹⁴.

Por lo expuesto, es claro en el presente evento que la víctima demandante no contribuyó de manera alguna en el hecho que lesionó su humanidad, ni siquiera participó en menor grado en la materialización del accidente, y el

¹⁴ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 23 de septiembre de 2021, expediente 11001-31-03-006-2013-00757-01. Magistrado Ponente Doctor Álvaro Fernando García Restrepo.

solo hecho de desplazarse por el lugar en donde acaeció el insuceso no la torna responsable de este. Estos motivos, entonces, conllevan al fracaso de las excepciones fundadas en: *“Insuficiencia de elementos probatorios que acrediten la responsabilidad”*. *“Ruptura del nexo causal por fuerza extraña – culpa exclusiva de la víctima”*. *“Reducción del monto de la indemnización por concurrencia de culpas”*, *“Inexistencia de la obligación de indemnizar, toda vez que, el contrato instrumentado en la póliza de responsabilidad civil contractual, no está llamado a producir sus efectos, por ausencia del presupuesto fundamental del mismo, a saber, la prueba de la responsabilidad del accidente de tránsito por parte del señor Alfonso Rozo Díaz, conductor del vehículo de placas JWR-063”*, *“Eximente de responsabilidad culpa exclusiva de la víctima”* y *“Concurrencia de culpas y consiguiente reducción de la indemnización”*.

De otra parte, en cuanto a la solidaridad derivada de la responsabilidad por el daño causado en ejercicio de actividades peligrosas, como lo es la conducción de automotores, conviene precisar que no solamente está llamado a asumir los perjuicios ocasionados el autor material del hecho, para este caso, el conductor del taxi, sino también la persona que ejerce la administración del vehículo y, en general, quien tenga la calidad de guardián, que recae en principio en el propietario, sobre el particular, la Sala de Casación Civil, ha dicho:

“...El responsable por el hecho de las cosas inanimadas es su guardián, o sea quien tiene sobre ellas el poder de mando, dirección y control independientes. Y no es cierto que el carácter de propietario implique necesaria e ineludiblemente el de guardián, pero si lo hace presumir como simple atributo del dominio, mientras no se pruebe lo contrario. ... O sea, la responsabilidad del dueño por el hecho de las cosas inanimadas proviene de la calidad que de guardián de ellas presúmese tener...”¹⁵.

En ese contexto, el señor Johan Ricardo Moreno Lugo, en calidad de propietario del automotor causante del hecho infortunado está llamado a efectuar el resarcimiento de los detrimentos impetrados de manera solidaria.

¹⁵ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 17 de mayo de 2011, expediente 2005-00345.

Establecida ya la responsabilidad civil extracontractual demandada, así como la solidaridad de los demandados corresponde abordar el estudio de los perjuicios reclamados.

En cuanto al reconocimiento del daño moral, el Alto cuerpo Colegiado al respecto señaló “... *incide o se proyecta en la esfera afectiva o interior de la persona, al generar sensaciones de aflicción, congoja, desilusión, tristeza, pesar, etc....*”¹⁶. En ese contexto el memorado Tribunal esbozó: “...*no es susceptible de demostración a través de pruebas científicas, técnicas o directas, porque su esencia originaria y puramente espiritual impide su constatación mediante el saber instrumental...*”¹⁷.

La jurisprudencia ha aceptado que esta clase de perjuicio puede inferirse o presumirse, puesto que la prueba del daño extrapatrimonial resulta dificultosa, ya que se trata de la presencia de sentimientos que generan impotencia frente al evento dañoso ocasionado a quien la padece. De ahí que el Alto Tribunal indicó:

“...En relación con la prueba, se ha de anotar que es, quizá, el tema en el que mayor confusión se advierte, como que suele entremezclarse con la legitimación cuando se mira respecto de los parientes cercanos a la víctima ..., para decir que ellos, por el hecho de ser tales, están exonerados de demostrarlos. Hay allí un gran equívoco que, justamente, proviene del significado o alcance que se le debe dar al término presunción. (...) allí no existe una presunción establecida por la ley. Es cierto que, en determinadas hipótesis, por demás excepcionales, la ley presume -o permite que se presuma- la existencia de perjuicios. Mas no es tal cosa lo que sucede en el supuesto de los perjuicios morales subjetivos. Entonces, cuando la jurisprudencia de la Corte ha hablado de presunción, ha querido decir que ésta es judicial o de hombre. O sea, que la prueba dimana del razonamiento o inferencia que el juez lleva a cabo... De todo lo anterior se sigue, en conclusión, que, no obstante que sean tales, los perjuicios morales subjetivos están sujetos a prueba, ..., las más de las veces, puede residir en

¹⁶ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 17 de noviembre de 2016, expediente 11001-31-03-008-2000-00196-01. Magistrado Ponente Doctor Álvaro Fernando García Restrepo.

¹⁷ Sala de Casación Civil, Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 30 de septiembre de 2016, radicación: 05001-31-03-003-2005-00174-01, Magistrado Ponente Doctor Ariel Salazar Ramírez.

*una presunción judicial...*¹⁸.

Así los pronunciamientos reseñados, permiten concluir que se estructura la presunción del daño moral, la cual debe desvirtuarla quien le corresponde asumir tal perjuicio.

Referente a la cuantía del perjuicio moral, deben atenderse los lineamientos jurisprudenciales, como las circunstancias personales del afectado, entre otros aspectos. En ese sentido el Máximo Órgano de la Jurisdicción Ordinaria ha dicho:

“...Esta razonabilidad surge de la valoración de referentes objetivos para su cuantificación, tales como las características del daño y su gravedad e intensidad en la persona que lo padece; de ahí que el arbitrium iudicis no puede entenderse como mera liberalidad del juzgador...”

Igualmente la Corte Suprema de Justicia ha dicho sobre el daño moral *“...éste perjuicio no constituye un «regalo u obsequio gracioso», tiene por propósito reparar «(...) in casu con sujeción a los elementos de convicción y las particularidades de la situación litigiosa», de acuerdo con el ponderado arbitrio iudicis, «sin perjuicio de los criterios orientadores de la jurisprudencia, en procura de una verdadera, justa, recta y eficiente impartición de justicia, derrotero y compromiso ineludible de todo juzgador...”*¹⁹.

Es importante recordar que con el transcurrir del tiempo, la Corte Suprema de Justicia ha reajustado la cuantía del aludido detrimento, en aras de fijar el monto por este concepto, máxime cuando en tal arbitrio judicial prevalece la medida, para que la condena no sea fuente de enriquecimiento para la víctima ni de arbitrariedad.

En ese sentido la Alta Corporación Civil ha pregonado que *“...a falta de normativa explícita que determine la forma de cuantificar el daño moral, el precedente judicial del máximo órgano de la jurisdicción ordinaria tiene un*

¹⁸ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 5 de mayo de 1999, expediente 4978.

¹⁹ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 9 julio de 2010, expediente 1999-02191-01.

*cierto carácter vinculante...*²⁰. Así en casos de accidente de tránsito, en donde la víctima ha resultado con daños de gran trascendencia por este hecho, como pérdida de capacidad laboral o secuelas de carácter permanente, la mencionada Corporación le ha reconocido como suma máxima \$50.000.000.00 por concepto de agravios morales.

Luego, de acuerdo a los precedentes jurisprudenciales citado, y conforme a las reglas de la experiencia y la sana crítica, si una persona que sufre un accidente, y consecuencia de ello su salud resulta resquebajada, es normal que ello le genere una afectación emocional, por lo que se estructura la presunción judicial de causación del daño moral alegado por el actor, máxime cuando la parte demandada no logró desvirtuarlo en las diferentes etapas del proceso.

Así, entonces, esta judicatura estima señalar como perjuicios morales la suma de ocho \$8.000.000.00, y no la cuantiosa suma pretendida por la demandante, dado que esta no fue respaldada probatoriamente, como le exige el artículo 167 del C.G.P.

Además, el monto fijado por este despacho se ajusta con los padecimientos que le pudo generar al accionante la lesión sufrida en uno de sus brazos, la cual no le dejó ninguna secuela de carácter permanente, ni daño irreversible en su salud.

Por todo lo dicho, no están llamadas a prosperar las excepciones de Enriquecimiento sin justa causa (por el cobro de lo no debido), Inexistencia de prueba del daño moral y daño a la vida en relación, excesiva tasación de perjuicios y falta de demostración de estos, por la demandante; pero, sí la denominada Indebida estimación de daños morales.

Igualmente, debe decirse que es inviable efectuar la corrección monetaria de la cifra reconocida por los daños morales porque, según ha dicho la Corte Suprema de Justicia “...la indexación únicamente procede respecto de las cantidades señaladas en los casos concretos. No sucede respecto de los topes fijados por la Sala, en el sentido de llevarlos actualizados y solicitarlos

²⁰Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 19 de diciembre de 2018, expediente 05736 31 89 001 2004 00042 01. Magistrada Ponente doctora Margarita Cabello Blanco.

así en determinado proceso. Como se indicó en uno de los fallos citados, “no se trata de aplicar corrección o actualización monetaria a las cifras señaladas por la Corte de antaño”, las cuales, periódicamente modifica la Sala, cuando toma la alternativa de actualizar el monto de tales cuantías en forma genérica como criterio reparador, cuando se alteran gravemente las circunstancias reales, o cuando se trata de casos especiales por el consenso de la Sala...”.

En punto al daño emerge reclamado, como obra en el expediente cotización por \$245.000,00 expedida por la empresa AKT, en el cual se identifica las partes de la moto que necesitan ser pintadas con ocasión de la afectación sufrida por el accidente de tránsito (folio 41 Archivo 2 ED), se reconocerá dicha cifra, que al ser indexada con el IPC aplicando la fórmula correspondiente, arroja un total de \$324.938.00.

Debido a que los demás documentos aportados no respaldan que los repuestos sean para el arreglo de la moto involucrada en el accidente, ni probó los gastos de transporte y médicos solicitados, entre otros, no se accederá a las demás cifras solicitadas.

En coherencia con lo dicho, no prospera la excepción denominada “Inexistencia de prueba de los perjuicios materiales”, porque, contrario a lo manifestado por la aseguradora demandada, si se acreditó en cumplimiento a la carga de la prueba impuesta por el art 167 del C.G.P., uno de los rubros reclamados por daño emergente.

Frente a la **objección al juramento estimatorio y/o a la tasación de indemnización de perjuicios**, de cara al artículo 206 del C.G.P., no se analizara porque no fue formulada como esta norma lo indica, más aun cuando el apoderado del conductor del taxi quien la propuso de manera contradictoria señaló que estaba de acuerdo con lo reclamado por daño emergente al expresar: *“Solicito señor Juez, se tenga en cuenta el juramento estimatorio, ya que los daños materiales son los únicos que reconoce esta parte demandada al igual de manera respetuosa solicito, se tenga en cuenta que el valor de indemnización y pretensiones según juramento estimatorio como lo regula el código general del proceso es por el valor de \$ 718.900 por lo tanto solicitamos que con base a ese juramento estimatorio sea el*

límite para la presente demanda.”. Agregado a ello, aunque alegó que no hay prueba que cuantifique los daños pretendidos, en el expediente se evidencia lo contrario como ya quedó visto.

Además, como el citado abogado dijo: “ *[en] el monto de la cuantía de las pretensiones solicitadas, al ser notoriamente injustas y temerarias por cuanto carecen de prueba que sustente su cuantificación y determinación, porque el perjuicio que se reclama no se ha causado; por lo tanto, solicito respetuosamente a su despacho se tomen las medidas necesarias tendientes a la regulación de la estimación de perjuicios realizada por la parte actora conforme lo señala el artículo citado*”, es importante recordar que el artículo 206 del C.G.P. estima solo permite que se formule la objeción frente a los daños materiales y no para lo extrapatrimoniales.

Dicho lo anterior, para resolver sobre la demanda formulada frente a la aseguradora, conviene mencionar que los artículos 1127 a 1133 del Código de Comercio, modificados por la Ley 45 de 1990, establece la acción que puede iniciar la víctima ante el hecho dañoso objeto de reclamo a la aseguradora frente a la indemnización de los perjuicios irrogados con ocasión de la ocurrencia del siniestro.

Por lo cual, el llamamiento en garantía, surge al tenor del artículo 64 del Código General del Proceso en “...*[q]uien afirme tener derecho legal o contractual a exigir de otro la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia que se dicte en el proceso que ...se le promueva...*”.

Esta figura “...*[p]ermite convocar en principio a una persona diferente a las partes inicialmente trabadas en la relación procesal (demandante y demandado), con fundamento en una relación sustancial (por ministerio de la ley) o por virtud de una relación contractual, existente entre el llamante y el llamado para que éste, responda de acuerdo a ese vínculo jurídico, de modo que el demandado llamante se libre de los eventuales efectos adversos que pueda acarrearle el litigio. Por tanto, es la relación material la que justifica trasladar los efectos adversos de la sentencia de una parte participante en la disputa al ahora citado, razón por la cual se acerca procesalmente a la denuncia del pleito. Por supuesto, se le llama, por*

*múltiples razones, entre ellas, por economía procesal y ante todo, para darle la oportunidad de ejercer su derecho de defensa, en la pretensión de reembolso o “revérsica” que le formula la parte convocante. Pero también puede surtirse, llamando a la coparte, como en este caso...*²¹.

Está definido que la Compañía Mundial de Seguros S.A., se vinculó inicialmente al proceso, con ocasión de la demanda en su contra y del llamamiento en garantía que hizo el propietario del taxi, como tomador de la póliza número 2000094315, expedida por la Compañía de Seguros antes referida, en la que son beneficiarios terceros afectados, vigente para la fecha en que ocurrió el siniestro, esto es 6 de marzo de 2021 -dado que esta vigencia de cobertura estaba amparada entre el 17 de octubre de 2020 hasta 17 de octubre de 2021 -, e incluye dentro de los riesgos amparados la responsabilidad civil extracontractual básica para vehículos de servicio público por muerte o lesión a una persona por un valor de 80 salario mínimos legales mensuales vigentes, y un deducible del 20% si el daño es superior a 2 S.M.L.M.V. sobre el monto de la cobertura²².

Resulta pertinente destacar que son disimiles el llamamiento en garantía y la acción directa “...*En efecto, algunas características diferenciadoras pueden ser: i) como demandada, la réplica se hace frente a las pretensiones y hechos que formula el actor en la demanda respecto de prerrogativas que supuestamente le pertenecen, mientras que como llamada, la oposición se hará ante las súplicas y hechos presentados por el llamante, por lo general un demandado, para proteger o garantizar su patrimonio de la presunta condena que pueda ser objeto; ii) si es condenada en la primera posición [demandada] deberá responder por lo pedido o lo probado en el juicio, en cambio como llamada solo responderá en la medida que el llamante sea condenado y únicamente en la cantidad acordada en el contrato o aquella indicada en la ley; iii) Procesalmente en el escenario actual, y en el artículo 66 del Código General del Proceso, por el “(...) término de la demanda inicial (...); iv) al proferirse el fallo se analizará de entrada la relación jurídico procesal entre demandante y demandado-llamante, en caso de este último salir condenado se entrará al estudio de la relación material entre llamante y*

²¹ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia SC5885 de 6 de mayo de 2016, expediente 2016, expediente 54001-31-03-004-2004-00032-01. Magistrado Ponente doctor Luis Armando Tolosa Villabona.

²² Folio 12 del archivo 8 Contestación llamamiento en garantía.

llamado, contrario sensu el juez estará exento de abordarlo; v) la ejecución de la sentencia se promoverá contra el demandado nunca contra el llamado en garantía; vi) la indemnización del perjuicio o el reembolso se hará por el llamado al demandado, nunca al demandante.

En adición, la fuente de la acción del demandante es el daño, mientras que la del asegurado en relación con la aseguradora convocada, es el contrato de seguro. Unas son las excepciones que se pueden formular por la aseguradora contra el asegurado, y otras las que el llamado puede formular al damnificado, porque en el primer caso media un contrato, en el segundo, hay ausencia del mismo, de tal modo que se encuentran en diferentes posiciones jurídicas. Una es la relación entre la víctima y el asegurado, en este caso, y otra muy diferente entre la víctima y la aseguradora, porque son distintos los títulos en uno y en otro evento...’’²³.

En relación a lo antes anotado, como el siniestro -lesión del señor IVAN ARIZA HERNÁNDEZ - ocurrió en vigencia de la póliza antes mencionada, los menoscabos causados por tal hecho infortunado deben ser cubiertos por la aseguradora intimada, previo descuento de deducible, de ser procedente. Por estas razones, la excepción de *Traslado del Riesgo a la Compañía Aseguradora Mundial de Seguros S.A.* no prosperará. Y la excepción “...**Límites de Cobertura**...” no constituye una exceptiva como tal que enerve las pretensiones.

Por ultimo cabe precisar que, “...*dado el doble posicionamiento procesal de la Compañía Mundial de Seguros S.A. en la litis, esto es, ser demandada, y a su vez llamada en garantía, y la acogida de las pretensiones enarboladas frente a aquella sociedad en la primera condición, lo correspondiente al llamamiento en garantía se subsume en los razonamientos expuestos con antelación, concretamente, en lo esgrimido respecto a la existencia de la relación contractual entre la aseguradora y la tomadora de la póliza, así como la vigencia de esta...*’’²⁴, por lo que no se efectuará pronunciamiento adicional

²³ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia SC5885 de 6 de mayo de 2016, expediente 2016, expediente 54001-31-03-004-2004-00032-01. Magistrado Ponente doctor Lis Armando Tolosa Villabona.

²⁴ Tribunal Superior del Distrito Judicial del Bogotá. Sala Civil. Sentencia, expediente 038 2021 00036 01.

4. En suma, comoquiera que no prosperan la mayoría de excepciones planteadas, tienen acogida las pretensiones, y se condenará en costas a los demandados (num. 1 artículo 365 C.G.P.).

III. DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el Juzgado sesenta y nueve Civil Municipal de Bogotá D. C., administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR probada la excepción denominada Indebida estimación de daños morales, negar los demás medios exceptivos, por las razones antes anotadas.

SEGUNDO: DECLARAR civil y extracontractualmente responsables al Sr. ALFONSO ROZO DÍAZ – conductor del vehículo involucrado en este juicio- y JOHAN RICARDO MORENO LUGO - propietario del automotor-, por los daños causados al demandante, con ocasión del accidente ocurrido el 6 de marzo de 2021 de que da cuenta la litis.

TERCERO: RECONOCER, en consecuencia, a favor de IVÁN ARIZA HERNÁNDEZ \$8.000.000 a título del daño moral y de \$324.938 por daño emergente.

CUARTO: DECLARAR que se configuran los requisitos para el pago de los amparos denominados "...DAÑOS A BIENES DE TERCEROS y LESIONES O MUERTE A 1 PERSONA", respaldados en la póliza número 200094315, expedida por La Compañía Mundial de Seguros S.A., para asegurar, entre otros, el vehículo involucrado en este proceso. A corolario, CONDENAR a la sociedad a pagarle, dentro de los 15 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, a IVÁN ARIZA HERNÁNDEZ, a título de indemnización por la ocurrencia de los siniestros asegurados en la póliza mencionada, las sumas reconocidas en el ordinal anterior, por concepto de perjuicios morales sufridos y daño emergente, por la cobertura de la póliza constituida, previo descuento del deducible, si corresponde. De ser el caso, acorde con lo contemplado en el artículo 1111 del Estatuto Mercantil. Por demás, el deber de solucionar el valor total de la condena

por tales detrimentos también está en cabeza de los convocados ALFONSO ROZO DÍAZ y JOHAN RICARDO MORENO LUGO.

Todos los montos anteriores se cancelarán en el término de ejecutoria de esta providencia, de lo contrario generarán intereses a la tasa del 6% anual, hasta cuando se satisfaga la obligación.

QUINTO: En cuanto al llamamiento en garantía, estarse a lo resuelto en la parte motiva.


SEXTO: CONDENAR en costas a la parte demandada, en forma proporcional. Liquidar como lo ordena el artículo 366 C.G.P. Fijar como agencias en derecho la suma de \$1.500.000.

COPIESE, NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,


ELVER ROLANDO RAMIREZ VARGAS
Juez

Rama Judicial del Poder Público
JUZGADO 38 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C.

La presente providencia se notifica por anotación
ESTADO No. 042 del 18 de junio de 2024


LUIS ALBERTO CARDOZO
Secretario